



VIGILANDO LA PLAZA DE CHERÁN, JUNIO 2011. FOTOS: VÍCTOR CAMACHO / LA JORNADA

LaJornada
Ojarasca
Suplemento mensual. Número 171. Junio 2011

Michoacán: Cherán y Ostula, nueva luz en el horizonte

Estado de México: Batalla de los pueblos contra el ecocidio de Peña Nieto

Perú: Aymaras detienen la destrucción

Ecuador: En Sarayaku el territorio es vida

En Centroamérica, ¿gobiernos privatizados?

***La flor de Guajira*, poema wayuu de Miguel Angel López-Hernández**

Umbral: México minado

Cherán, pueblo en vilo: fotos de Víctor Camacho

México minado

Si como propone el poeta wayuu Miguel Ángel López-Hernández, somos la primavera de nuestros muertos, basta ver estos rostros que no vemos de los niños de Cherán para entender (los pueblos siempre lo han entendido) que la tierra no es nuestra, sino de los que siguen. La Tierra, ciudades incluidas. La tenemos de encargo. Se las estamos cuidando. Y esa es una grave responsabilidad.

Bien que sabemos que los indígenas no cuentan. Y menos en México, donde aunque les regateen cifras e identidades, siguen siendo la cuarta parte de todos los indígenas americanos, y sin duda los mexicanos que mejor defienden al país, de tan sólo defenderse.

Los sentimientos colectivos de “¡ya basta!”, “nunca más un México sin nosotros”, que hallan su eco en “estamos hasta la madre”, “ni una más”, han permeado a contrapelo la conciencia nacional. Atrapado como está el país en el peor vendaval capitalista de la historia, ubicado en el mero corazón del cataclismo, donde al “choque de culturas” del pensamiento colonial le viene a salir el chirrón por el palito. Somos el catálogo de muestra de lo que puede resultar el mundo futuro si no detenemos al neoliberalismo brutal.

Un México minado por el criminal contratismo minero promovido por el Estado. Deglutido por la avaricia turística. Por los monocultivos castrantes y los transgénicos grilletes esterilizantes. Los arrasamientos carreteros, hidroeléctricos, industriales. El endeudamiento eterno, los pagarés de la guerra múltiple, que finalmente es contra el pueblo. Contra las mujeres. Contra los territorios indígenas. Contra la educación, y peor si es intercultural o autónoma. Los pagarés impagables.

Los desarrolladores en el poder que van vomitando planes por donde pasan están asesinando la tierra, y no sólo a la bola de cristianos que vivimos en ella.

Eduardo Galeano, al visitar solidariamente el campamento (“acampe”) del pueblo qom en el centro de Buenos Aires, hace unas semanas, en una entrevista de banqueta con Indymedia Argentina lo decía inmejorablemente:

Los indígenas no son el problema de las Américas sino que son la solución. Tenemos que aprender de ellos.

Esas voces que resuenan desde el pasado más remoto pero hablan al futuro de la comunidad de la naturaleza y todas las personas.

El suyo es el mejor de los mensajes: somos todos parientes de todo lo que tiene piernas, pero también patas, alas o raíces.

La defensa del agua, los bosques, la tierra, es también nuestra defensa.

El planeta puede ser salvado siempre y cuando escuchemos las voces nunca escuchadas, las más despreciadas.

Los que más voz tienen son los no escuchados, rodeados del desprecio general, casi silencio.



En Centroamérica ¿Gobiernos privatizados?

San José, Costa Rica. Si alguna vez nos hemos quejado del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, tendríamos que pensar que México es el país que ha firmado más tratados y acuerdos comerciales, de cooperación científica y técnica, de seguridad (y cuanta vaina nos imaginemos con quién sabe qué tantos países e instituciones extranjeras). México fue el proyecto piloto de una serie de tratados y acuerdos que ahora proliferan por toda nuestra América y que tienen más que preocupados los países del área, incluso Costa Rica, “el país más feliz de la tierra”, como la llaman los promotores de la visión idílica que envuelve a esa nación que también fue, a mucha honra, una de las que más peleó, como sociedad civil, contra el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC-EUCARD).

Este tratado, como todos los que hoy se firman, ya no podemos entenderlo como acuerdo o tratado de comercio, sea libre, condicionado o sesgado. En realidad son sistemas de imposición de una matriz de gobierno y formas de relación que se acomodan (paso a paso y requisito a requisito) desde los niveles de decisión más altos hasta lo más local. Desmantela la institución gubernamental y la sustituye con regulaciones, estándares, criterios, normas técnicas, de sanidad, transporte, calidad, que deberían ser materia pública pero que va quedando subsumida por cláusulas impuestas por otros países. ¿Y la soberanía nacional?

Un ejemplo extremo, y reciente, ocurre en Heredia, municipio conurbado con San José, capital de Costa Rica, donde la “entidad de servicio público” fue concesionada a una empresa privada que, con nuevas leyes a modo, está acaparando servicios público, y su planeación, administración, operación, desarrollo, mantenimiento, evaluación. Hablamos del servicio de agua potable, la infraestructura del alcantarillado, el alumbrado, la recolección de basura. Ahora alardean de que hasta la seguridad pública. Y todo regulado (aunque se trate de “servicios públicos”) por leyes más laxas que regulan la actuación de las empresas privadas. Claro, tener el control del agua en esas condiciones pone a esta “entidad de servicio público” en condiciones buenisimas para decidir muchas cuestiones en la municipalidad; contar con un sello de disponibilidad (de agua potable) es requisito para el desarrollo urbano, el loteo, la construcción, la calificación de nuevo comercio. Como resultado, estas empresas terminan definiendo el desarrollo urbano de la localidad en todos sus rubros, lo que significa que en Costa Rica está en marcha un experimento, basado en los tratados de libre comercio, donde se buscan maneras de privatizar más y más áreas del gobierno. ¿Y el bien común, el servicio a la ciudadanía?

A quienes promueven estos inquietantes desarrollos les parece normal esta vuelta, porque así, dicen, el gobierno se descarga, y puede ocuparse de cuestiones “más de fondo”. Tal entidad, organizada con la figura de una sociedad anónima aunque sea una empresa pública, termina siendo una instancia u órgano semiautónomo, incluso en su régimen de contratación laboral.

Según GRAIN, además está lo que ahora llaman “huracán Wal Mart”, que en toda Centroamérica vino a desmantelar los sistemas agrícolas y los mercados tradicionales, arrasados por los grandes almacenes y sus empresas subsidiarias de comercialización. “Uno de cada tres colonos gastados por los costarricenses en comida lo gastan en Walmart”. Además, vienen empujando fuerte la minería a cielo abierto, los agrocombustibles, la palma africana, los monocultivos de piña inundados de agrotóxicos y los programas de compensación que pretenden vaciar el campo y llenar las ciudades. Más los cárteles de delincuencia, como en todo el continente. Centroamérica se hace cosmopolita.

Ramón Vera Herrera

suplementojarasca@gmail.com

La Jornada

Directora General: Carmen Lira Saade
Publicidad: Marco Hinojosa.

Ojarasca

Dirección: Hermann Bellinghausen
Coordinación editorial: Ramón Vera Herrera
Edición: Gloria Muñoz Ramírez • Redacción: Marcela Salas Cassani
Fotografía y Diseño: Yuriria Pantoja Millán
Caligrafía: Carolina de la Peña
Retoque fotográfico: Alejandro Pavón • Asesoría técnica: Francisco del Toro

La Jornada Ojarasca es una publicación mensual editada por DEMOS, Desarrollo de Medios, SA de CV. Av. Cuauhtémoc 1236, Col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, CP. 03310, México DF. Teléfono: 9183 0300 y 9183 0400. • El contenido de los textos firmados es responsabilidad de los autores, y los que no, de los editores. Se autoriza la reproducción parcial o total de los materiales incluidos en Ojarasca, siempre y cuando se cite la fuente y el autor. ISSN: 0188-6592. Certificado de licitud de título y contenido: 14973, de septiembre de 2010. Reserva de título de la Dirección General del Derecho de Autor: 04-2010-070114295700-107. No se responde por materiales no solicitados. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV. Av. Cuittihuaac 3353, Col. Ampliación Cosmopolita, México, DF.

Batalla contra el ecocidio en el Edomex

Los indígenas rechazan las privatizaciones de Peña Nieto

Marcela Salas Cassani



LA DEFENSA DE CHERÁN, MICHOACÁN

“El gobierno ha jugado un papel muy importante en el despojo de tierras”

demarcaciones denuncian que hubo engaños para que los comuneros vendieran, de manera ilegal, sus tierras. “A un anciano que vive solo en el bosque, le ofrecieron cuatro mil pesos por su milpa y su ranchito, y como él no habla español, les firmó cediendo los derechos de su tierra, cosa que es contraria a derecho, pues por tratarse de tierras comunales, antes de vender debe consultarse a la asamblea”, dijo Ernestina Ortiz.

Miguel Mireles Ramírez, comunero de Huiztilapa, relata: “En mi comunidad, sin avisar nada a nadie talaron más de mil árboles y marcaron las tierras para empezar las obras de construcción, pero, en aquella ocasión, los comuneros los detuvimos y nos organizamos en asambleas para manifestar nuestro absoluto rechazo a la carretera”.

La cordillera del Parque Otomí-Mexica, que va de las Lagunas de Zempola hasta el Cerro de la Bufa, fue declarada área natural protegida en 1980, y en el 2006, durante la administración de Enrique Peña Nieto, fue nombrada Santuario del Agua, debido a los innumerables humedales y manantiales que garantizan el abasto del líquido vital a las poblaciones que viven alrededor de la cordillera, así como al Distrito Federal y su zona metropolitana. Más tarde, en el 2007, el área fue ratificada como patrimonio ecológico del Estado de México.

“Sin embargo, el gobierno no hace nada por preservar los recursos naturales. En las tierras comunales se están abriendo minas para su explotación, con la consecuente destrucción de mantos acuíferos, y se llevan a cabo talas forestales clandestinas avaladas por

dependencias de gobierno como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Agraria”, la cual, apunta Marcelino González Hernández, ñañhú de San Miguel Ameyalco, “ha jugado un papel muy importante en el despojo de las tierras, pues manipula a las poblaciones para que cedan sus terrenos, provocando divisiones no sólo entre comunidades, sino también entre familias”. González Hernández agrega que además, a través de la Secretaría de Gobernación del Estado de México, “se ha instado a las comunidades a que acepten el proyecto de la autopista con el argumento de que ‘Enrique Peña Nieto debe ser presidente’, y han hostigado, amenazado y sobornado a autoridades tradicionales que se oponen a la venta de tierras”.

En Valle de Toluca, zona lacustre, las lagunas de Chingnahuapan y Chimaliapan, que nacen del río Matlatzincó (río Lerma) se encuentran amenazadas hoy más que nunca, pues, además de enfrentar las sequías provocadas porque alimntan al sistema Cutzamala desde hace más de 50 años, el proyecto carretero tiene contemplado pavimentar la zona, lo cual provocaría la pérdida definitiva de mantos acuíferos y manantiales, así como de los cientos de especies que allí habitan.

Muy cerca del Valle de Toluca, se encuentra el pueblo de Amomolulco, lugar donde nace el agua dulce, otro pueblo amenazado por las grandes obras que el gobierno de Peña Nieto pretende realizar antes de que termine su gestión. “Aquí”, señala Víctor Manuel Coria Sánchez, comunero de Amomolulco, “en 161 hectáreas, de las cuales 44 son tierras comunales, se pretende construir la ‘Ciudad de Conocimiento’, un proyecto a cargo del grupo Carso, de Carlos Slim, para el que se pretende despojar a 44 familias de sus territorios ancestrales”.

Fernando Lechuga, originario del Tultepec y representante legal de los comuneros de Amomolulco, señala que “al invadir los predios comunales, el gobierno del estado viola la Constitución mexicana, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

Frente al intento ilegal de compra de tierras comunales por parte del gobierno, Víctor Manuel Coria señala que: “no queremos ni un centavo de ellos, lo queremos son nuestras tierras, que nos dejen en paz, que se detenga el ecocidio”.

Ante esta brutal embestida del Estado, los pueblos de la entidad se han organizado en el Frente de Pueblos Indígenas por la Defensa del Medio Ambiente, movimiento ciudadano al margen de los partidos políticos que realiza diferentes esfuerzos por “pasar la voz”. El frente difunde su lucha vía internet, y a través de foros como la Cumbre de Pueblos Indígenas en Defensa del Medio Ambiente, que se realizó el 15 de mayo en San Francisco Xochicuautla, y la asamblea realizada el 4 de junio en San Mateo Atarasquillo. El objetivo es lograr la articulación de los diversos pueblos de la región Toluca-Naucalpan para hacer frente a la ambición de un Estado capitalista que pretende arrebatarles su territorio.

“Que sepa el gobierno que los indígenas seguiremos alzando la voz, exigiendo respeto a nuestra autonomía y libre determinación”, finalizó Marcelino González.

Una nueva luz en el horizonte michoacano

Gloria Muñoz Ramírez. Morelia, Michoacán. Las experiencias de autodefensa indígena que encabezan las comunidades nahua de Ostula y purhépecha de Cherán, representan una alternativa de organización comunitaria desde abajo en defensa del territorio contra la delincuencia organizada, los paramilitares y las autoridades que actúan en complicidad con el narcotráfico.

En Ostula y en Cherán, la primera localizada en la costa michoacana y la segunda en la meseta purhépecha, se organiza la población para protegerse de "todos" (delincuentes, gobiernos, talamontes, caciques, paramilitares) y en ambas comunidades han logrado abatir, sin las instituciones, los actos delictivos, con excepción de los asesinatos y desapariciones que tienen que ver más con la represión a su organización que con la delincuencia común.

Entrevistados por *Ojarasca*, representantes de ambas comunidades coinciden en que sus pueblos representan dos esfuerzos reales para enfrentar la violencia cuando se han agotado todas las instancias y los gobiernos no responden, pues suelen estar coludidos con el crimen organizado. Los costos y los retos no son pocos. En Ostula, en estos dos años fueron desaparecidos cuatro miembros de la comunidad, y en los últimos seis meses han sido asesinados 16 de sus compañeros "por miembros de la delincuencia organizada al servicio de los supuestos pequeños propietarios de La Placita". En Cherán se cuentan diez homicidios en los últimos tres años (tres en los dos meses de la resistencia) y cinco "levantones". Pero sus luchas, coinciden, ya no tienen regreso.

En Ostula se reactivó hace dos años la policía comunitaria tradicional y la formación de un cuerpo de guardia comunal para proteger la posesión de sus tierras recuperadas; mientras que en Cherán la seguridad está a cargo de la ronda tradicional desde el 15 de abril y es apoyada por rondines de vigilancia conformados por toda la comunidad. La implementación de su autodefensa, explican, "no es ilegal, pues está amparada en acuerdos internacionales y en el pleno ejercicio de la autonomía".

La policía comunitaria nahua funciona en el paraje recuperado de Xayakalan, donde "no hay violencia ni asesinatos, pues éstos han ocurrido principalmente en la carretera costera número 200, bajo vigilancia federal, y en poblados fuera de nuestro territorio". En Ostula, relatan, "con todo y nuestros muertos y desapare-

cidos, hemos logrado detener la delincuencia, la construcción de carreteras, las minas, los proyectos turísticos. Todo con organización".

En Cherán, por su parte, en estos más de dos meses han disminuido en un 90 por ciento los índices de delincuencia, las extorsiones, los robos a vehículos y domicilios, el abigeato, los levantones y la destrucción de sembradíos. La tala de bosques se paró también en un 90 por ciento, "pero no alcanzamos a cubrir la vigilancia de todo el territorio, pues es enorme y aún están saliendo dos o tres vehículos diarios con madera, lo cual no es nada, considerando que antes del levantamiento salían más de 200".

Ninguna de estas dos experiencias se concibe sola. Al momento de la entrevista colectiva, los comuneros nahuas intercambian experiencias con los purhépechas. Hay planes para organizar un encuentro de experiencias de autodefensa, donde cada una hable del camino recorrido, de sus problemas, retos y avances. La solidaridad es palpable. "Así aprendemos y nos damos ánimo", coinciden, junto a los entrevistados.

Sobre la trascendencia de sus luchas y el referente que construyen a nivel nacional, los de Cherán reconocen con modestia ser parte de "la esperanza de que hay formas de protección comunitaria cuando impera la desconfianza en los cuerpos de seguridad institucionales". Los de Ostula, por su parte, indican que su experiencia es un ejemplo de que se puede trabajar "sin el permiso" del gobierno. "Nadie arriba hará nuestro trabajo y sólo nosotros podemos responder. Además, si te desorganizas eres más perseguido, y seguro acabas en la cárcel o muerto".

En ambas luchas, coinciden, lo primero fue dejar a un lado los partidos políticos y las diferencias religiosas. "En Ostula se rebasaron todas las instituciones, los partidos y los gobiernos. Se tomó la decisión de no participar en las elecciones y organizarnos para salvaguardar a la comunidad sin el permiso de nadie, sólo de la asamblea". En Cherán "ya no dejamos que los partidos políticos interfieran en nuestras decisiones y nos dividan". Fue de lo primero que acordaron. "Se dejaron atrás las ideologías partidistas, las diferencias religiosas y hasta los pleitos entre familias".

Cherán "es sólo una respuesta local a la violencia y al despojo, que busca sobrevivir", pues ven "que se puede hacer algo distinto para enfrentar el desastre en el que nos han metido". En Ostula dicen:

"desde el momento en que recuperamos las tierras cada amanecer es una victoria, cada día estamos frente a la lucha".

Nuevos retos para Cherán

La movilización en Cherán empezó el 15 de abril, cuando los talamontes entraron al ojo de agua de La Cofradía y un grupo de comuneros los enfrentó, detuvieron a cinco de ellos e iniciaron la defensa activa de sus bosques. En unas cuantas horas el pueblo entero salió a las calles a defenderse, colocar barricadas y organizar rondines nocturnos para salvaguardar la comunidad, poniendo un alto a la tala indiscriminada de sus montes y a la ola de violencia que los tenía "hasta la madre", con secuestros, extorsiones, robos y "levantones".

Hoy, advierten los comuneros, a más de dos meses del inicio del levantamiento los retos de la organización se han incrementado. La prioridad inicial fue organizar la seguridad interna, para lo que se armaron con palos, piedras, machetes, azadones, palas y lo que pudieron, y enfrentaron a quienes desde hace tres años devastaban los bosques de la comunidad, con la protección de grupos armados y del gobierno que no ha hecho nada para pararlos.

En las semanas siguientes empezaron a organizar comisiones de educación, salud, imagen, prensa y abastecimiento. Y hoy los retos más importantes están en la reactivación de la economía, para lo que crearon una comisión de producción, y en la reeducación de la población para que interiorice el respeto a las comisiones encargadas de la vigilancia. En el poblado actualmente hay ley seca, pero "la gente no siempre hace caso y por eso hace falta una mayor concientización y, sobre todo respeto, que la gente entienda que estamos en un proceso para construir nuestra propia protección".

Con la organización y el paso del tiempo se han incrementado las necesidades. Los rondines de vigilancia requieren de lámparas, impermeables, radios de banda civil, botas, etcétera. Mientras que para el sostenimiento de las barricadas y de las 179 fogatas con que se vigilan los cuatro barrios de Cherán, se necesitan víveres: café, azúcar, frijol, arroz, sal, aceite y demás comestibles.

El movimiento, explican, tiene su raíz en nuestra identidad como pueblo, en nuestra cultura y nuestro vínculo con la naturaleza. "Pero de cualquier forma hace falta mucho trabajo para reconstruirnos y fortalecernos. Ya dimos el primer paso,

que fue la solución a la emergencia, pero cada día nacen nuevos retos. Ahora estamos en el inicio de la reconstrucción de la cultura y nuestros derechos".

Cherán cuenta con 27 mil hectáreas de territorio comunal, dentro de las cuales 20 mil son boscosas; de éstas han sido incendiadas y taladas, totalmente destruidas, más del 80 por ciento, y el otro 20 por ciento también ha sufrido la tala, pero aún no lo han incendiado. Esta situación los llevó a movilizarse.

Dos años de resistencia en Ostula

El 29 de junio se cumplieron dos años de que los nahuas de Ostula, apoyados por los comuneros de El Coire y Pomaro, recuperaron más de mil hectáreas que durante 40 años estuvieron invadidas por supuestos pequeños propietarios de la comunidad La Placita. Las tierras recuperadas han sido disputadas por narcotraficantes, inversionistas inmobiliarios, los supuestos pequeños propietarios y empresas mineras. Sólo que pertenecen a los nahuas.

En junio de 2008, recuerdan en un comunicado reciente, desesperados ante la invasión de su territorio, la lentitud y la falta de respuesta de las diferentes instancias de gobierno, la comunidad decidió en

asamblea que su lucha no tendría nada que ver con los partidos políticos y decidieron recuperar, el 28 de junio, el paraje llamado la Canaguancera, fundando ahí el poblado autónomo y campamento en resistencia Xayakalan.

A raíz de la recuperación de esa parte de su territorio, la reactivación de la policía comunitaria y la guardia comunal, y la construcción del poblado autónomo Xayakalan, "se agudizó el hostigamiento y la represión por parte de grupos de paramilitares fuertemente armados, contratados y protegidos por los supuestos pequeños propietarios de La Placita y con la complicidad u omisión de la Marina Armada de México y demás fuerzas militares que operan en la zona".

Con todo y el hostigamiento, llegaron a su segundo aniversario "celebrando la recuperación de las tierras", lo que representa "un triunfo grande para nosotros, porque las mantenemos y no hemos dejado que nos las arrebaten", señala un representante del nuevo poblado, que se localiza en el litoral del Pacífico michoacano, donde actualmente siembran maíz, papa y ajonjolí.

Lo que sigue, señalan, es seguir trabajando la tierra, edificar el poblado, hacerlo más grande. "También tenemos que buscar la forma de fortalecer nuestra organización. Ya no es lo mismo que hace dos años. Hay nuevos retos y sin nos atrancamos, nos apagamos".

Los comuneros nahuas explican que en Ostula "ya no dependemos del gobierno, él mismo cómplice de la delincuencia, sino sólo de la organización comunitaria: ahí está nuestra fuerza".

A los desafíos de organización interna bajo permanente hostigamiento, se suma ahora la emergencia suscitada por el paso del huracán Beatriz por su territorio. El 21



FOTOS: VICTOR CAMACHO

de junio, Xacakalan fue duramente golpeado por el fenómeno natural que destruyó casas, milpas y árboles frutales. (Para apoyar la reconstrucción de la comunidad se reciben víveres en el local de *Úntos, Carmona y Valle 32, colonia Doctores, México DF, y depósitos en la cuenta bancaria 2776589065, a nombre del Encargado del Orden, Bernardino Gómez Mata, BBVA Bancomer, sucursal 1256 de Tecomán, Colima. CLABE 012 097 0277765*).

"LOS RETOS DE LA ORGANIZACIÓN SE HAN INCREMENTADO"



Purhépechas y nahuas en resistencia

Carmen Ventura Patiño

Al analizar las democracias en América Latina, el político argentino Guillermo O'Donnell señalaba que en algunos de nuestros países, incluso aquellos donde los regímenes democráticos son recientes, la democracia se encuentra en convivencia con bandas terroristas y mafias, las cuales se han ido transformando en poderes territoriales. Éstas "tienen sus códigos legales, cobran 'impuestos' y algunas veces logran casi el monopolio de la coerción en su territorio" (en *La democracia en América Latina. El debate conceptual sobre la democracia*, Perú, PNUD, 2004). En estos casos presenciamos un Estado territorialmente evanescente. El poder y la expansión de estos grupos no podría entenderse sin la fuerte relación que establecen con las burocracias estatales, la policía y otras fuerzas de seguridad. A las regiones dominadas o controladas por estos grupos, donde las reglas realmente imperantes son las dictadas por diversas mafias, O'Donnell las denomina "zonas marrones", especie de manchones o lunares en las geografías nacionales.

En nuestro país, vemos con preocupación cómo estas zonas marrones, que no son nuevas, se han ido reproduciendo y apoderando de nuestros territorios con rapidez, controlando el espacio físico, la circulación de personas y mercancías, imponiendo en varios casos a las autoridades judiciales, interviniendo de distintos modos en la designación a cargos de elección popular, e incluso definiendo la orientación de los recursos municipales. Su control tiene distintas manifestaciones, no sólo respecto a las actividades propias de su negocio, también se apoderan de propiedades, obligando a sus dueños a cederlas legalmente, y "vendíéndoles" protección, entre otras acciones.

En este escenario se encuentran varias regiones indígenas en México, como la costa nahua y la meseta purhépecha en Michoacán. La comunidad de Cherán, después de años de saqueo continuo de sus bosques, decidió poner un alto a los talamontes; de las 27 mil hectáreas forestales han sido depredadas 20 mil. La tala clandestina no es nueva, ha sido denunciada ante las autoridades, distintos gobiernos priístas y perredistas que no han tenido capacidad o voluntad para resolver esta situación. Las respuestas han consistido en programas de reforestación, pequeños proyectos productivos tanto para los afectados como para quienes se dedican a esta actividad, y la presencia temporal de algún cuerpo de seguridad. Política paliativas. En poco tiempo se vuelve a la tala clandestina. Ahora el panorama es mucho más complejo, hay nuevos actores interviniendo con el uso de la violencia, desapariciones, secuestro, tortura y asesinato. A dos meses de la iniciativa de defensa comunal, han sido asesinados tres hombres, y otra persona se encuentra en el hospital.

La defensa de Cherán por sus bosques, no representa nada más el respeto a su medio ambiente y sus recursos naturales, también la defensa de su vida colectiva, su reproducción como comunidad, su derecho a la vida y a su cultura. No es fácil

pasa a la página 6

El reportaje gráfico de Víctor Camacho fue realizado durante la visita a la comunidad de Cherán de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad el 26 de junio.

Viene de la pág. 5

luchar contra un actor nuevo de rostro desdibujado, que no se sabe a hasta dónde extiende sus redes políticas, económicas y en los cuerpos de seguridad. La decisión comunal de organizarse, colocando barricadas, haciendo guardias y rondines, donde todos participan, hombres, mujeres y niños, da cuenta de una cohesión colectiva. Es una respuesta de unidad frente a un actor que amenaza seriamente su presente y su futuro; muestra un tejido social vivo, con capacidad para defender su comunidad. Sin embargo, se requiere la solidaridad de la sociedad civil y de una respuesta contundente de quienes gobiernan y hasta ahora no han actuado con inteligencia, su imaginación no encuentra otra salida que responder del mismo modo, contribuyendo a la espiral de violencia, sin titubear por los “daños colaterales”.

En este mismo clima de violencia vive la comunidad nahua de Ostula en la costa michoacana. Los comuneros llevan décadas en un interminable camino jurídico por el reconocimiento de su territorio, que también reclaman pequeños propietarios. En el 2003, tras la intervención del gobierno del estado, las partes acordaron que mientras el asunto se dirimía en las instancias correspondientes, el gobierno estatal resguardaría la zona en conflicto, la cual comprende una franja de superficie cerril que desemboca en el océano Pacífico. La situación permaneció en calma hasta la llegada del actual gobernador, Leonel Godoy, quien retiró al Grupo de Operaciones Especiales que protegía la zona. Esto fue aprovechado por algunos pequeños propietarios; de acuerdo a un representante de la Secretaría de la Reforma Agraria, “uno de ellos se metió y empezó a fraccionar, vender o regalar lotes”. La comunidad intervino el 29 de junio de 2009, sacaron a los pequeños propietarios y tomaron posesión de su territorio, poco más de mil hectáreas, y las han resguardado mediante la reconstitución de su policía comunitaria tradicional. Al predio lo denominaron Xayacalan. Allí, un año antes fue encontrado el cuerpo del profesor Diego Ramírez Domínguez, nombrado por la comunidad su representante en la defensa de sus tierras. El costo humano ha sido alto. Sólo en los últimos seis meses 16 comuneros han sido asesinados o desaparecidos.

Cherán y Ostula viven un proceso de fortalecimiento comunal, necesario para responder a la embestida de nuevos actores, cuando la violencia es cotidiana y los grupos de poder político muestran incapacidad e ineficiencia. En este contexto se ha generado una reflexión colectiva que cuestiona la participación de los partidos políticos, que no han estado a la altura de las reivindicaciones indígenas, y cuya racionalidad obedece únicamente a su propia sobrevivencia política. Por ello, la democracia electoral no encuentra cabida en la agenda comunal. En Ostula decidieron no participar en las pasadas elecciones federales y, para el período electoral estatal por venir, Cherán anunció que en ejercicio de su derecho a la libre determinación y autonomía nombrará a sus próximas autoridades municipales. Por lo pronto, las actuales autoridades fueron desconocidas y se nombró un consejo comunal. Se han innovado otras formas de participación y toma de decisiones al interior de las comunidades, nuevos espacios de representación que abonan a lo que Boaventura de Sousa Santos llama *demodiversidad*.

Por lo pronto, la respuesta está construyéndose desde abajo. La ciudadanía organizada, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dibuja una esperanza. El tejido social y la posible unidad de estos movimientos locales y regionales, confluendo en una agenda nacional, nos permiten cifrar las posibilidades de cambio y la “urgencia de futuro”.

Carmen Ventura Patiño es investigadora del Colegio de Michoacán.



NOCHE DE GUARDIA EN CHERÁN

Flor de la Guajira

Miguel Ángel López-Hernández

En Flor de la Guajira flota un aire vaporoso, donde las libélulas se quedan pegadas en los escasos arbustos del lugar.

Alietshi me conduce hacia la única sombra: la tienda de Rosa Ipuana.

Ella nos recibe y nos entrega un cebo blando... susurrándonos:

“Dos espíritus amarillos viajan en sus espaldas, son vanillúü de la enfermedad... deben botar todo lo que han comido en los últimos días y no hablar entre sí durante la recuperación”.

Así lo hicimos... y el vacío de todos los Wayuu muertos y el misterio de todos los Wayuu vivos se montaron en nuestros hombros.

Vimos el rostro del abandono a nuestra semejanza delante de una roca polvorienta... nos sonrió y, con su bastón de mando, señaló hacia el cerro Epitsü:

“Allá los esperan -dijo-, sabrán que la mitad de sus vidas pertenecen a sus difuntos.

No intenten arrebatárselos... allá los esperan...son ustedes la primavera de sus muertos”.

Miguel Ángel López-Hernández (Vito Apushana), poeta wayuu de Colombia, originario de Carraipia, La Guajira (1965). Autor de *Encuentros en los senderos de Abya Yala*, 2004 y *En las hondonadas maternas de la piel*, 2010. Profesor de la universidad de la Guajira y productor de televisión.

El pulso aymara

Ni hidroeléctricas ni minas en Perú

Gianni Proietti. Lima, Perú. Los aymaras de los Andes, un pueblo-nación dividido entre Perú y Bolivia, nunca fueron fáciles de someter. Ahora mostraron su capacidad de lucha al ganar una importante controversia: detuvieron el proyecto para una central hidroeléctrica en el río Inambari. Un decreto de la secretaría de Energía y Minas a mediados de junio anuló la concesión de la obra, que había suscitado la resistencia compacta de los habitantes del Altiplano.

Los aymaras de la región de Puno -la misma que comprende el Titicaca, el lago más alto del mundo y vital reserva de agua-, organizados en el Frente de Defensa de los Recursos Naturales del sur de Puno, comenzaron a movilizarse un mes atrás. Desde entonces, han practicado las formas duras de lucha que comparten con otros pueblos indoamericanos, como el bloqueo de las arterias viales y fluviales que atraviesan sus territorios.

Estas y otras medidas de presión sobre las autoridades -huelgas, manifestaciones, plantones, bloqueo del puente internacional del Desaguadero que une Perú con Bolivia, a orillas del Titicaca-, lograron la cancelación del proyecto, cuya realización había sido concesionada a la compañía Egasur (Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur), filial del consorcio brasileño Igesa. La central, diseñada para producir dos mil 200 megavatios, hubiera tenido un costo de 5 mil millones de dólares, pero sólo la mitad de la energía producida se hubiera quedado en Perú, lo demás se hubiera destinado a Brasil.

El subsecretario de energía, Luis González Talledo, afirmó incluso que de ahora en adelante las concesiones a empresas transnacionales tendrán que pasar por la aprobación de los pueblos afectados, a través de una consulta “libre e informada”, como lo estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El subsecretario olvidó puntualizar que una ley del Congreso, que asume el convenio 169 en la legislación nacional -aprobada luego de la matanza de Bagua en junio de 2009, con la cual el gobierno creía acallar las protestas amazónicas- fue bloqueada por el presidente Alan García y yace, en espera de revisión, en la tierra de nadie entre el Congreso y la presidencia.

Sin embargo, lo que prevalece en estos días en el amplio y compacto movimiento popular es la satisfacción de haber detenido el proyecto colosal de la central del Inambari, útil para el hambre de energía de la región, pero nefasto para el medio ambiente y las poblaciones locales.

Mauricio Rodríguez, presidente regional de Puno, se declara satisfecho por la decisión gubernamental: “El proyecto de la central hidroeléctrica hubiera no sólo dañado la seguridad y la vida de la región, también habría interferido con la autopista Interoceánica (aún incompleta, que a través de Bolivia y Brasil conecta el Pacífico con el Atlántico), que pasa justo por donde querían construir la central. Cien kilómetros de autopista hubieran acabado bajo el agua, donde hay tierras fértiles, biodiversidad y 10 mil habitantes”.

El triunfo de la resistencia popular sobre el proyecto del río Inambari, que no es definitivo, sólo una tregua temporal, no ha desmovilizado al movimiento, puesto que no renuncia a los otros dos objetivos: el saneamiento del río Ramis y la sus-

pensión definitiva de las concesiones mineras en la región. El frente puneño no pretende eliminar todas las actividades extractivas, petrolíferas y mineras, tiene conciencia del valor del recurso. Sin embargo exige -con la fuerza que dan el derecho a la vida y la defensa del territorio- que estas actividades sean desarrolladas de manera responsable, consultando y beneficiando a las poblaciones locales con derechos históricos sobre su hábitat por ser pueblos originarios, y tratando de reducir al mínimo el impacto ambiental. Es factible, a no ser por la devastadora voracidad de las compañías transnacionales y la escasa transparencia de las concesiones.

Mientras en la provincia de Carabaya, que fue centro de la agitación en mayo, la gente celebra sin bajar la guardia y las escuelas reanudan clases, en Ayaviri, en la provincia de Melgar, comienzan huelgas y bloqueos viales para que se cancelen los permisos a tres empresas mineras.

La actitud aparentemente conciliadora del gobierno contradice lo que pasó en Lima el 15 de junio: el presidente del Frente de Defensa de Puno, Walter Aduviri, quien estaba en la capital junto con otros siete dirigentes para dialogar con el gobierno, luego de no ser recibido por ninguna autoridad se vio sitiado en unos estudios televisivos, donde había participado en un debate. Afuera, la policía pretendía detenerlo en cumplimiento de una orden judicial.

Aduviri contó con la protección del gerente de Panamericana TV y de dos congresistas recién electos, acorralado en la doble condición de líder y vocero de un movimiento, pero acusado de delitos perpetrados por manifestantes el 26 de mayo en Puno, aunque existan muchos testimonios sobre la presencia de infiltrados en aquella protesta.

Alan García, quien dejará la presidencia el próximo 28 de julio a Ollanta Humala, jugó la misma movida de hace dos años con el movimiento indoamazónico: primero invita al diálogo, luego saca

las esposas. Sin embargo, las órdenes de aprehensión contra los dirigentes aymaras fueron canceladas.

“No soy un delincuente”, dijo Aduviri al abandonar la estación televisiva. “Defender los recursos naturales no es cosa de delincuentes”.

Más de doscientos militantes del Frente habían pasado la noche enfrente de la emisora para impedir la captura de su líder. Alberto Pizango, dirigente de AIDSESP, la mayor organización de indígenas amazónicos, llegó a expresar el apoyo del movimiento indoamazónico. Millares de simpatizantes ya preparaban manifestaciones en la ciudad de Puno en caso de que arrestaran a Aduviri.

Mientras que en Lima continuaba el diálogo entre los líderes puneños y los representantes del gobierno, éstos anunciaban la publicación de cinco decretos que, entre otras cosas, cancelaban la concesión a la minera canadiense Bear Creek en la zona de Santa Ana y ordenaban (y financiaban) el saneamiento del río Ramis. Sin embargo, el conflicto en el departamento de Puno está lejos de haberse solucionado.

El 25 de junio, miles de manifestantes contra la minería ocuparon el aeropuerto en Juliaca (Puno) un día después de que la policía antidisturbios mató a cinco activistas. Horas antes de la ocupación, el gobierno revocó el permiso a Bear Creek, en un intento por convencer a los indígenas de suspender las protestas, que se han extendido por más de un mes. La minera anunció que demandará al gobierno peruano para recuperar su concesión. Los indígenas insistieron en su derecho a aprobar o rechazar las operaciones de minería en sus comunidades, denunciaron a las empresas por la contaminación y advirtieron que seguirán resistiendo la industria minera.

Gianni Proietti, periodista italiano de *Il Manifesto*, capturado en Chiapas por el gobierno mexicano hace pocos meses, y deportado.



A LA ENTRADA DE CHERÁN, JUNO DE 2011



Sarayaku, Ecuador

El territorio es la vida

Mario Melo

La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia.

Gandhi

En 1996, el Estado ecuatoriano concesionó el Bloque 23, que afecta un 60 por ciento del territorio del pueblo originario kichwa de Sarayaku, a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina. Esta concesión fue realizada sin que haya precedido por parte del Estado ecuatoriano ningún proceso de información, consulta o pedido de consentimiento al pueblo de Sarayaku para la realización de actividades petroleras en el territorio de su propiedad.

Desde 1996 Sarayaku ha expresado su rechazo a la actividad petrolera en su territorio, fundamentado en los enormes impactos negativos que dicha actividad provoca en su territorio sagrado, en la calidad de vida de sus miembros, en su forma de vida y opciones de desarrollo, en su espiritualidad, en el ambiente amazónico, en la paz social y en la integridad de todos.

Sin embargo, durante el último trimestre de 2002 y el primer trimestre de 2003, la CGC ingresó reiteradamente al territorio de Sarayaku, contra la voluntad del legítimo propietario, para realizar investigaciones sísmicas altamente destructivas. Para intentar detener la campaña sísmica, Sarayaku se declaró

en emergencia por siete meses y movilizó a sus pobladores, hombres, mujeres, jóvenes y niños a resguardar su territorio en los Campos de Paz y Vida en medio de la selva, donde se estaba produciendo la invasión armada de la CGC y el ejército. Esta decisión implicó graves riesgos para los miembros de Sarayaku.

Según el Ministerio de Energía, existen 476 puntos dentro del territorio de Sarayaku y el territorio Achuar en donde la CGC colocó, sin conocimiento de los afectados y sin haberlos consultado antes, cargas de entre tres y cinco kilos de pentolita, un explosivo de alto poder. En total hay mil 433 kilos (casi tonelada y media) de explosivos sembrados a 12 metros de profundidad, y una cantidad no determinada en la superficie de la selva sagrada de Sarayaku, en sus lugares de caza, en sitios donde niños y jóvenes transitan en busca del sustento. La información que dio el Ministerio es que ese explosivo es muy peligroso y las cargas pueden detonarse accidentalmente con mucha facilidad.

A inicios de 2003, Sarayaku solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención urgente en salvaguardia de sus derechos violados durante la campaña de sísmica de la CGC. En mayo, la Comisión dictó medidas cautelares a favor de la comunidad y de su especial relación con su territorio. El Estado

ecuatoriano desoyó sistemáticamente dichas medidas.

Frente al incumplimiento, la (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana dictar medidas provisionales a favor de Sarayaku, las mismas que fueron otorgadas en julio de 2004. Dichas medidas buscan proteger a los miembros de Sarayaku, la investigación de la violencia cometida en su contra y la garantía efectiva del derecho al libre tránsito violentado por el arbitrario bloqueo del río Bobonaza por aliados de la petrolera, como medida de presión para que Sarayaku desista de las acciones legales y entre a negociar.

Ante el nuevo incumplimiento del Estado ecuatoriano, la Corte, en junio de 2005 ratificó las medidas y las amplió incorporando la disposición de que se retiren urgentemente los explosivos dejados por la CGC en territorio de Sarayaku. Hasta la primera mitad de 2007, en los primeros meses del gobierno del presidente Rafael Correa, el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, aceptó la disposición de la CIDH. Y desde entonces el Ministerio de Minas y Petróleo gestionó el retiro de los explosivos, que empezaría a cristalizarse a fines del mismo año. Para diciembre de 2009, con el concurso del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, se habían retirado apenas 14 kilogramos de explosivos y el proceso se suspendió hasta la fecha.

Todo este esfuerzo del gobierno por cumplir las disposiciones de la Corte, destinadas a proteger los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, se diluyó. El 8 de mayo de 2009, el ministro de Minas y Petróleo autorizó sorpresivamente el reinicio de las operaciones petroleras en los Bloques 23 y 24, a las que el pueblo de Sarayaku y las nacionalidades shuar y achuar se oponen desde finales de los noventa. Esta autorización también va abiertamente en contra de otras decisiones de organismos internacionales de derechos humanos que amparan a los indígenas. Aun cuando el reinicio de actividades dispuesto no fue acatado por la CGC, este hecho demuestra la frágil situación en la que se encuentra Sarayaku.

Peor aún, en la renegociación del contrato del Bloque 10 entre el gobierno del presidente Correa y la empresa AGIP, celebrada en noviembre de 2010, las autoridades entregaron a dicha petrolera una porción del Bloque 23 que afecta el territorio de varios pueblos indígenas amazónicos. Sarayaku queda también afectado por el Bloque 10. Esta redefinición del Bloque se hizo, nuevamente, a espaldas de las nacionalidades y pueblo, sin haberseles consultado ni pedido consentimiento, pese a la gravedad de los efectos que esa decisión traerá a sus vidas y territorios.

El 26 de enero de 2010, la CIDH emitió una resolución respecto al caso.

Ahora el caso ha sido remitido a la CIDH. Los días 6 y 7 de julio de este año, en San José, Costa Rica, se llevará a cabo la audiencia de Sarayaku. Esta diligencia es crucial porque en ella el pueblo kichwa de Sarayaku, de la Amazonía ecuatoriana, presentará ante los jueces sus alegatos orales, así como las pruebas testimoniales y periciales con las que demostrará las violaciones de derechos humanos que sufrió durante la actividad petrolera del Bloque 23. Desde Sarayaku viajará a Costa Rica una delegación de líderes, sabios tradicionales, hombres y mujeres de la comunidad.

La Corte dictará una sentencia que es esperada con expectativa por pueblos indígenas y expertos del mundo entero y en especial del continente americano, pues sentaría nuevos precedentes respecto al derecho a la consulta previa y al consentimiento de las comunidades afectadas por proyectos petroleros. Para Ecuador esa sentencia, que deberá ser cumplida obligatoriamente por el Estado, traerá grandes repercusiones pues zanjará un debate, muy intenso en los últimos años, respecto al alcance del derecho a la consulta y de los derechos territoriales de los pueblos indígenas afectados por proyectos de explotación de recursos naturales propiciados por el Estado.

El autor es abogado del pueblo de Sarayaku.